

Luego del evento de CADE, que según varios analistas pareció preparado para el lucimiento de uno de los candidatos a la Presidencia de la República, pero cuya influencia se disipó rápidamente, la figura de Ollanta Humala ha cubierto el escenario periodístico y político. Esto nos remite a dos reflexiones. La primera es la constatación de la limitada influencia empresarial y mediática sobre la política en los tiempos actuales. La segunda es que si la figura de Humala crece es porque en el país deben de haber problemas muy relevantes que solo este candidato destaca, al margen de si se estima que lo hace bien o mal. Más aún, parece que ningún otro candidato está dispuesto a levantar esas banderas, pese a que la fuente de la fuerza humalista parece provenir de ellas.

No es una novedad afirmar que el Perú es todavía una nación en formación. El problema étnico está en la base de nuestra constitución como república, pero no ha sido resuelto y nunca ha sido enfrentado directamente. En vez de eso, a lo largo de nuestra historia republicana ha sido tratado como si no existiera. Sería deseable que las fuerzas políticas «sistémicas» no dejen a los *outsiders* la solución de este problema fundamental y de otros, igualmente importantes, como el desafío que presenta la pobreza.

En el momento actual, la solución de varios de los problemas centrales del país no pasa por lo que se llama un «cambio de modelo» (que, además, nadie especifica claramente en qué consiste) sino por un cambio de políticas. En medio de esto está el peso e importancia que debe tener el Estado en el Perú actual, y su relación con el capital nacional y extranjero, grande y pequeño. El país necesita un Estado sólido cuya fortaleza provenga de la integración nacional construida sobre la base de la «ciudadanización» de todos los habitantes, es decir, de la igualdad de derechos económicos y políticos para todos.

La economía de mercado en la que nos desenvolvemos es suficientemente flexible como para aceptar un rango de políticas que va desde lo que se conoce como «neoliberalismo» o «capitalismo salvaje» hasta aquellas que consideran que el camino a la eficiencia pasa necesariamente por la equidad y la distribución del ingreso. Preferimos este segundo enfoque pues creemos que un país con más de 50% de su población en la pobreza no

puede ser un país pacificado. Sin embargo, este no es un problema técnico, pues cada política afectará positivamente a ciertos grupos sociales y negativamente a otros, quienes actuarán defendiendo sus intereses.

En las economías modernas, está reconocida la importancia de la regulación como un componente indispensable para el funcionamiento del mercado. Este es un mecanismo tal vez universalmente aceptado como un límite indispensable al «capitalismo salvaje». La regulación corrige fallas de mercado y permite el funcionamiento eficiente (y también más justo, visto desde el lado del derecho) del mercado. Sin embargo, en esa pugna entre los extremos de las políticas posibles en una economía de mercado, algunos consideran que el mercado se regula solo y buscan restringir la acción de los organismos reguladores, acercándonos más al «capitalismo salvaje».

Aunque durante los últimos 15 años denigrar a los políticos y a la actividad política sobre la base de algunos casos reales de conductas indeseables se haya convertido en un deporte mediático, lo cierto es que ninguna sociedad puede desenvolverse civilizadamente sin el ejercicio de esta actividad. El parlamento es la institución más identificada con el ejercicio de la política. Los errores y delitos cometidos por algunos representantes han desatado en la prensa y en algunos políticos una especie de discurso unificado tendente a reducir los sueldos de los congresistas y de todos los funcionarios públicos. Algunos han puesto en 5.000 soles el ingreso máximo que debería obtener un funcionario público, y no pocos políticos en campaña se han sumado a esta fiebre por otorgarles las remuneraciones más bajas que sean posibles. Ellos olvidan que un Estado fuerte requiere funcionarios bien remunerados y que, aunque esos sueldos rebajados pueden parecer buenos a los pobres del país, no serán suficientemente atractivos para convocar a la función pública a personal capacitado.

Nuestro país necesita crecer, pero para hacerlo sostenidamente requiere solucionar pronto los problemas irresueltos que nos ha legado nuestra historia. De no hacerlo, los fantasmas del pasado seguirán apareciendo ante nuestros ojos para sobresaltarnos y enfrentarnos, y los *outsiders* serán los encargados de resolverlos. ■

El Director